
El pueblazo del 21 de enero de 1993. Ajuste y resistencia en Entre Ríos

Mesa 41: El trabajo y los trabajadores en conflicto

Alejo Mayor (GEHCCS-UADER): lic.alejomayor@gmail.com

Resumen

El proceso de ajuste en la provincia de Entre Ríos a principios de la década del 90, en consonancia con lo que se venía produciendo en el resto del país en el marco de la “reforma del Estado”, se llevó a cabo mediante un acuerdo entre el gobierno justicialista de Mario Moine con Cavallo y contó con el apoyo explícito de sectores de la Iglesia. El acuerdo consistió en la aprobación en la legislatura provincial, a instancias del poder ejecutivo, de una “ley ómnibus” para “sanear” las cuentas del arca provincial, incluyendo despidos en la administración pública y privatizaciones. El plan de ajuste, conocido a principios de 1993, fue denominado “Informe Domenicone” (por el funcionario del Ministerio del Interior ligado al Banco Mundial encargado de su redacción) y preveía el despido de 10.000 trabajadores en el plazo de un año.

La reacción de los trabajadores organizados no se hizo esperar y se manifestó contundentemente. Rápidamente, organizados de manera multisectorial con la dirección de ATE, el movimiento obrero entrerriano protagonizó una manifestación histórica el 21 de enero de 1993, probablemente la movilización convocada por el movimiento obrero más importante de la historia provincial, abriendo un proceso de lucha en contra del ajuste en la provincia y sentando un precedente a las resistencias que se irían dando en otras provincias.

En este trabajo me propongo reconstruir el proceso de ajuste que se intentó llevar a cabo desde el Estado provincial y la reacción de los distintos sindicatos, para luego centrarme en el análisis del hecho concreto de la movilización en Paraná el 21 de enero: los actores movilizados, su organización y las acciones conflictivas que se fueron poniendo en juego en la dinámica del conflicto. Para eso utilizaremos como fuentes el semanario político “Análisis” y testimonios provenientes de entrevistas semi estructuradas con actores clave.

Palabras claves: ajuste – resistencia – sindicatos

1. Introducción

Las profundas transformaciones que se consolidaron en la formación social argentina en la década del '90, como corolario de una política que desde el Estado se comenzó a imponer con la dictadura surgida del golpe cívico-militar de 1976 de la mano de las políticas macroeconómicas neoliberales, implicaron una verdadera “mutación y reconfiguración estructural” de la sociedad argentina (Svampa, 2012), que en dicha mutación fue transformando su fisonomía social de una sociedad con elevados índices de integración social, propios de una situación de cuasi pleno empleo, a una sociedad fragmentada y heterogénea, con una enorme polarización social y exclusión social hacia el ocaso del siglo. Esta mutación se produjo mediante lo que Barbeito y Lo Vuolo (1992) tempranamente llamaron un proceso de “modernización excluyente”, doble proceso de “modernización” (eufemismo para dar cuenta de la racionalización del trabajo desde el punto de vista del capital, es decir orientado en pos de la maximización de la ganancia) y de exclusión de amplios sectores de la población, que se reprodujo en cada región del país, con tiempos y dinámicas específicas (Rofman, 1999).

Sobre el trauma que en vastos sectores de la población produjo la crisis hiperinflacionaria, se fueron generando las condiciones para la aplicación “en toda la línea” de la política neoliberal, verdadera ofensiva burguesa sobre los trabajadores. Ofensiva que, a su vez, se desarrolló a escala planetaria, en el marco del “consenso de Washington” y el derrumbamiento del mundo de los llamados “socialismos reales”. Luego de un proceso de duras derrotas de los trabajadores a nivel mundial que ancla sus raíces en los años '70, tanto a nivel político-militar, con la represión y aniquilamiento político de las izquierdas y el movimiento obrero, como en el ámbito mismo de la producción (desde donde se estructuró un verdadero proceso de “descolectivización”); en nuestro país la crisis hiperinflacionaria implicó un punto de inflexión que terminó por sentar las condiciones políticas de la aplicación de las medidas de ajuste del programa neoliberal, llamadas eufemísticamente medidas de “modernización”. Como sostiene Cotarelo, “[t]ras ese tratamiento de shock, la cúpula de la burguesía logró completar la destrucción de las relaciones sociales propias de la fase capitalista anterior y construyó las relaciones que se correspondían con el capital financiero, en un proceso que atravesaba buena parte del mundo” (Cotarelo, 2016, p. XXV).

Por supuesto, los trabajadores (ferroviarios, telefónicos, docentes, estatales, siderúrgicos, jubilados, entre otros) presentaron resistencia a dicho proceso, sin embargo, las huelgas del período 1990-1991, de características defensivas, se mantuvieron aisladas y fueron derrotadas o poco pudieron hacer para frenar las transformaciones en curso.

En particular, en este trabajo nos centraremos en el análisis de un conflicto particular, la movilización del 21 de enero de 1993 en Paraná, Entre Ríos. Consideramos que este hecho conflictivo, verdaderamente masivo, marcó el inicio en la provincia del ciclo de resistencia trabajadora a las políticas de ajuste “neoliberal” de la década, es decir, se vincula a uno de los aspectos fundamentales de este proceso de “mutación” y es el del cambio de la forma del Estado, en particular el impacto de estos cambios en los Estados provinciales. Proceso de ajuste que, una vez adoptado el modelo de acumulación basado en la convertibilidad, se desplegó en las provincias a partir de la implementación de un paquete de medidas contenidas en las denominadas “Leyes Ómnibus” y, como señalamos anteriormente, respondió a temporalidades y dinámicas diferentes en las distintas provincias del país, como en realidades fiscales, productivas, políticas, sociales, culturales muy diferentes. Aquí analizaremos el caso de la provincia de Entre Ríos, y en particular en la ciudad de Paraná, su capital provincial. De hecho, Entre Ríos fue prácticamente un “caso piloto” para la aplicación de las denominadas “leyes ómnibus”, que luego se irían replicando en otras provincias, siempre despertando la resistencia activa de amplios sectores de la población, fundamentalmente de los trabajadores empleados por el Estado, los principales afectados. La situación abierta en el año 1993 encontró a casi todos los Estados provinciales al borde del colapso en medio de millonarios déficits presupuestarios. Retraso en pago a los acreedores y a los trabajadores asalariados estatales, pago de salarios con bonos provinciales, en cuotas, reducciones salariales, recisión de contratos de trabajadores, entre otras medidas que coadyuvaron, junto al deterioro de los sistemas de la salud y la educación pública que implicó el traspaso del Estado nacional a las provincias y la privatización de empresas dependientes del Estado provincial (como las de Gas, Electricidad o el Frigorífico de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos) a un aumento de “la pauperización y precariedad en las condiciones de vida y trabajo de buena parte de la población” (Cotarelo, 2016, p. 197). Vale decir que estas políticas fueron llevadas a cabo por todos los gobiernos provinciales, independientemente del sello político (PJ -en la mayoría de las provincias, incluida Entre Ríos-, UCR o partidos provinciales).

Para la reconstrucción de los hechos voy a utilizar dos tipos de fuentes: por un lado, el semanario político Análisis, que brinda una descripción minuciosa de los hechos, me

permitirá realizar una narración bastante exhaustiva y densa de lo acontecido; y por el otro, testimonios orales provenientes de entrevistas semi estructuradas que realice a algunos protagonistas de aquellos acontecimientos, que me brindarán la posibilidad de recuperar la valoración de la movilización y el lugar que los actores le otorgan tanto en sus memorias como en el entramado histórico, casi veinte años después.

2. El ajuste en Entre Ríos en el marco de la “reforma del Estado”

“La actuación de los gobiernos provinciales justicialistas estuvo signada por el posibilismo en la relación con el gobierno menemista.

Buscaron “cuerpear” algunas cosas, pero primó la subordinación.”

Edgardo Massarotti

A Mario Moine (PJ), un empresario local (dueño de la cadena de supermercados “Los Hermanitos”), le tocó asumir como gobernador de Entre Ríos en un momento de particular relevancia para la historia económica y política reciente del país: el de la adopción del régimen de acumulación basado en la moneda convertible (la convertibilidad o, en lenguaje popular, el “1 a 1”).

Fue en el mes de diciembre, cuando agonizaba el año 1992, que se aprobó la Ley 8706 de despidos en la administración pública, que implicó 2.605 despidos de un día para el otro, aunque el convenio firmado por el ejecutivo provincial en un primer momento preveía dejar sin trabajo cerca de 10.000 empleados públicos en el plazo de un año. La respuesta que desde el movimiento obrero se produjo en resistencia a este proceso, marcó un punto de inflexión en el proceso de conflictividad entrerriano que, de alguna manera, sería un laboratorio de ensayo de algunas modalidades de organización y lucha que pertrecharán el repertorio de protesta del movimiento social provincial.

El proceso de ajuste en la provincia se llevó a cabo tras un acuerdo del gobierno justicialista de Moine con Domingo Felipe Cavallo (a quién el gobernador entrerriano había cuestionado hasta el año anterior, mostrándose como opositor a sus políticas de ajuste) y contó con el apoyo explícito de sectores de la Iglesia. El acuerdo consistió en la aprobación en la legislatura provincial, a instancias del poder ejecutivo, de una llamada “ley ómnibus” para

“sanear” las cuentas del arca provincial, incluyendo despidos en la administración pública y privatizaciones.

De acuerdo con Alejandro Sologuren, por aquel entonces dirigente de ATE y futuro fundador de la Corriente Clasista Combativa (CCC) en Entre Ríos,

“Moine apareció acá también diciendo que estaba contra Cavallo que no aceptaba lo de Cavallo. Nosotros también planteamos la necesidad de unirse contra Cavallo y bueno, una vez que ganó Moine dijo que no podía enfrentarse a las líneas políticas nacionales de Cavallo y vino el primer gran ajuste en la provincia, con la intención de echar 10.000 empleados trabajadores estatales”¹

Fue recién a principios de enero de 1993 que se conoció por los medios locales que, a pesar de las desmentidas del gobierno provincial, el convenio de ajuste firmado a fines de diciembre efectivamente contemplaba el despido de los 10.000 trabajadores de la administración pública en el plazo de un año. Este ajuste recibió el apoyo del arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Karlic, quien declaró que se trataba de “medidas que hacen al bien común”². En la misma línea se pronunció el cura Gabriel Batello, conocido por el ser confesor del gobernador.

El plan de ajuste se redactó bajo el nombre de “Plan para la Contingencia”, por el funcionario del Ministerio del Interior Héctor Domenicone, ligado al Banco Mundial, por lo que se lo conoció como “Informe Domenicone”. El informe sugería la cesantía de 20.000 trabajadores, mientras que el gobernador Moine había sostenido el número de 5.000, en dos etapas. Finalmente, el borrador confeccionado por José Luis Manzano y firmado con Gustavo Béliz, acordó el número de 10.000 trabajadores que debían ser expulsados del estado provincial antes del 31 de diciembre de 1993. Esto debía producirse paulatinamente: primeramente, se sancionó en la legislatura el pase a disponibilidad de 2605 agentes, en una sesión de la Cámara de Senadores donde las bancas del bloque oficialista estuvieron adornadas por militantes de ATE con profilácticos (“forros”) con los nombres de cada miembro³. Esta original forma de protesta anticipó una modalidad que se haría carne en el repertorio de acciones de los trabajadores de la provincia del período: los “escraches”. Los

¹Entrevista a Alejandro Sologuren

²“Moine y un lápiz rojo de mucha punta”, Análisis n°745, 7/1/1993

³El único legislador del oficialismo que votó en contra fue Sergio Urribarri, quien luego fuera gobernador de la provincia durante dos períodos consecutivos (de 2007 hasta 2015).

“escraches”, modalidad que cobró mayor visibilidad a partir del accionar de HIJOS frente a ex represores y criminales de lesa humanidad, tienen la particularidad de “personalizar” la política, es decir, señalar como foco de la protesta política a la persona, con nombre y apellido, responsable de determinadas decisiones. El “santiagoueño” de diciembre de 1993, en ese sentido, implicó una nueva inflexión en este tipo de protesta, al dirigir el locus de ciertas acciones (como los saqueos) al domicilio particular de ciertos actores políticos (Dargoltz, 1993; Farinetti, 2017). Volveremos sobre esto.

Desde el Ministerio de Economía, se sostuvo que Entre Ríos se había transformado en la provincia piloto para realizar este tipo de ajuste. Santa Fe y Córdoba, aparecían en el horizonte, como las próximas provincias en formalizar convenios de “saneamiento de deuda” similares, aunque “[t]odas anticiparon que el ajuste lo harán en forma más paulatina y menos salvaje”⁴.

El gobernador Moine, según un vocero del Ministerio del Interior, había intentado “capitanear el conjunto de las provincias que se oponían al Pacto federal fiscal y al acuerdo Nación-provincia, pero después cambió rotundamente. Pasó de ser opositor total a aliado *prima facie*. Eso fue determinante para que se acuerde, en primer lugar, con Entre Ríos. Moine se transformó en un aliado en serio y arregló con Cavallo, Manzano y el actual titular de la cartera política”. El enfrentamiento con Cavallo venía desde antes que el Ministro de Economía asumiera su cargo: en una reunión con los gobernadores electos el 20 de noviembre de 1991, Moine le había espetado: “No nos venga a decir como tenemos que gobernar en nuestras provincias”. Luego, en declaraciones a *Ámbito Financiero*, se había ufano de no atender las llamadas del titular de la cartera de economía. Esta situación comenzó a cambiar en los meses previos a la interna del justicialismo que lo enfrentaba con Jorge Pedro Busti, en los cuáles Moine empezó a aproximarse al gobierno nacional. Como sostiene la cita que abre este apartado, más allá de los forcejeos primó la subordinación a las políticas nacionales. De acuerdo con “un alto funcionario del Ministerio de Economía, para los últimos días del año 1992, “Moine hizo un mea culpa el día de la firma del convenio. En concreto dijo que él estaba equivocado con respecto a o que opinaba de Cavallo. Que ahora lo respetaba más y estaba totalmente de acuerdo con las medidas económicas por él instrumentadas. Incluso llegó a considerar que la única forma de gobernar correctamente era haciendo un ajuste de este tipo”. El alineamiento del gobierno provincial con las políticas neoliberales que emanaban de nación era total.

⁴“Moine y un lápiz rojo de mucha punta”, *Análisis* n°745, 7/1/1993

Esta reforma recibió la oposición de los trabajadores organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quiénes la confrontaron desde antes de su votación y desde un espectro de acciones que fueron desde las acciones institucionales (como el recurso a la justicia) a otras que implicaron “poner el cuerpo” directamente, como la movilización y los escraches. El otro gremio que agrupa a agentes del sector público, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en cambio, acompañó al gobierno.

En ese sentido, desde un primer momento, ATE buscó accionar desde el plano administrativo y desde el planteo de un juicio contencioso administrativo nivel del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Otra posibilidad que evaluaron los abogados del sindicato fue la del amparo, mecanismo que opera cuando se afectan derechos constitucionales. La base del recurso presentado por ATE estuvo centrada en el artículo 21 de la Constitución provincial que planteaba que “ningún empleado o funcionario podrá ser despedido de la administración pública con un año de antigüedad mientras dure su buena conducta, su constricción al trabajo y su salud física y mental”. Desde el gobierno, en cambio, se ampararon en el inciso 14 del artículo 81 que facultaba al Poder Legislativo para crear o suprimir empleos⁵. Simultáneamente a estas medidas administrativas y judiciales, los trabajadores de ATE se manifestaron en el interior mismo de la legislatura, desde donde profirieron insultos a los representantes y disponiendo, primero en diputados y luego en senadores, preservativos sobre las bancas de aquellos que apoyaban el proyecto de ley ómnibus que finalmente fue aprobado⁶. Estas acciones se complementaron con otras medidas tendientes tanto a incentivar la movilización de los trabajadores como a generar un consenso de rechazo a la medida en sectores más amplios (la llamada “opinión pública”) como “asambleas para contrarrestar el temor, difusión del significado de despidos entre los sectores ligados al mercado interno, demostración del empleo público como prestador de servicios (salud, minoridad, educación, vivienda) contrarrestando la imagen de burocracia”⁷, así como un el intento de acordar con el poder político mediante la construcción de datos mediante un relevamiento sobre situación de revista, categorías, núcleo familiar, etc.

La complicidad con el proceso de ajuste, empero, no solo consistió en sectores de los partidos mayoritarios y de sectores de la iglesia, sino también de las conducciones de algunos gremios, que confeccionaron listas de personal a quedar en “disponibilidad” (“listas negras”). De esta manera, muchos sindicatos negociaron con el gobierno el número de

⁵ “¿Será Justicia?”, Análisis n°745, 7/1/1993

⁶ “Legislatex”, Análisis n° 745, 7/1/1993

⁷ Entrevista a Edgardo Massarotti

trabajadores a dejar en la calle, a la vez que utilizaron dicho proceso como mecanismo disciplinador al interior de los gremios con sectores o trabajadores opositores o díscolos.

Desde el sindicato de Luz y Fuerza, por su lado, miembros de la comisión directiva se reunieron con el gobernador para interiorizarlo del plan alternativo elaborado por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza para la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER). El mismo implicaba que, sumadas las bajas por jubilaciones ordinarias, jubilaciones anticipadas y adhesiones al régimen del Retiro Voluntario, el número de trabajadores que se reduciría oscilaría entre 300 y 350. A su vez, se contemplaba la reubicación de otros trabajadores. “A los recursos los generamos nosotros, somos un ente autárquico y nos regimos por un marco jurídico diferente al de los estatales. No estamos en la ley ómnibus”, argumento Fabián Medina, el secretario general de Luz y Fuerza⁸. Este proceso no estuvo exento de conflictos entre los trabajadores del sector, como cuando, ante la amenaza de algunos jefes de sección de incluir en las listas a algunos empleados, los trabajadores de redes decidieron hacer una retención de servicios y no salieron a la calle a cumplir sus tareas habituales. Por otro lado, los trabajadores manifestaron su preocupación por ahuyentar el fantasma de privatización que rondaba a la empresa de energía estatal, aunque desde la conducción se hizo mediante un discurso pleno de ambigüedad: “Nos preocupa este discurso, que la presenta como una empresa deficitaria y que es necesario achicar, cuando en realidad somos eficientes y nos autofinanciamos; y que todo esto sea para privatizarla. **No porque estemos en contra de la privatización, al contrario, estamos a favor de la participación del capital de riesgo privado**”⁹ (la negrita es mía).

Por el lado de los trabajadores viales, el secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), Carlos Lallana, sostuvo que “entre retiros voluntarios, bajas vegetativas y adscripciones llegan a 200 los que se van. Quedarían 90 que lo hacen por legajo, Nosotros, como gremio, no fuimos a decir quién se iba y quién no, sino a controlar que no se digiten las disponibilidades”, a la vez que aseguraron que el gremio no tuvo injerencia en la confección de los listados.

UPCN, como señalamos anteriormente, fue el único gremio que adhirió e impulsó la reforma del estado, lo que valió la calificación de “traidores” de parte de sus pares de ATE. Como señaló Edgardo Massarotti, el secretario general de ATE, “UPCN siempre tuvo una actitud

⁸“Las listas negras”, Análisis n° 745, 7/1/1993

⁹Idem

“acuerdista” (que no es lo mismo que dialoguista). Con Agmer, Judiciales, Apler, Jerarquizados Municipales tuvimos grandes acuerdos y unidad en la acción. Otros, más simbólicamente que efectivamente, también acompañaron.”¹⁰

3. La resistencia trabajadora

La resistencia a estas medidas, no se hicieron esperar. En el sector de la salud pública, con la consigna “personal separado, hospital parado”, los trabajadores y trabajadoras del Hospital San Martín y el Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná, rápidamente se organizaron en asambleas a fin de definir las acciones de lucha a concretar para enfrentar el ajuste, a la vez de definir estrategias de comunicación hacia la comunidad de la incidencia que los recortes tendrían sobre la prestación de los servicios de salud.

Los trabajadores nucleados en ATE decidieron la realización de paros progresivos a partir de la recepción de los telegramas de despidos. Desde el gremio de los estatales interpretaron la llegada de los documentos de disponibilidad en varias etapas, como una estrategia de desgaste de parte del gobierno.

Las asambleas contaron con la adhesión de algunos médicos, quienes se solidarizaron y adhirieron a las medidas. En los mecanismos de selección del personal “prescendente” por parte del gobierno, desde el hospital San Roque sostuvieron que primaron los de “vendetta política”, como el despido de la doctora Ana Kinen, de extracción radical, única médica de la provincia con título que la capacitaba en el área de radiografía pediátrica¹¹. Desde la Secretaría de Salud, asimismo, se exigió listados detallados de las personas que habían participado de las asambleas.

En el contexto de bronca y tensión creciente, se reunió una “Asamblea en Defensa de Entre Ríos y su Pueblo”, donde se conformó un comité de lucha (integrado, entre otros, por los secretarios generales de ATE -Edgardo Massarotti- y AGMER -Clelia Lavini-) que anunció una movilización en la capital provincial, para el jueves 21 de agosto a las 19:30, a culminar en una concentración frente a la Casa de Gobierno. Dicha movilización a su vez se vería replicada en los distintos departamentos por manifestaciones similares a dirigirse a los domicilios particulares de los legisladores que aprobaron la ley “ómnibus”.

Quedó conformada, de esta manera la Multisectorial (tal cómo se la denominaría de allí en más) que habrá de ser un actor fundamental durante la década y el ciclo de luchas que tiene

¹⁰ Entrevista a Edgardo Massarotti

¹¹ “El que no tiene senador, se embroma”, 14/1/1993

su punto más alto en el año 2001, con la Multisectorial como ariete de todas las luchas contra las políticas de ajuste en la provincia. La primera Multisectorial en la provincia, entonces, surgió al calor de esta lucha en enero del '93, a instancias principalmente de ATE (con el liderazgo indiscutible de Edgardo Massarotti) en alianza estrecha con Agmer (con quiénes compartirán la acción organizada en el nucleamiento de la CTA, cuyas discusiones aún no habían arribado a la provincia), junto con otros sindicatos, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, asociaciones profesionales, etc. A pesar del carácter fundamentalmente policlasista de su composición y del carácter multisectorial del mismo, fue claramente la clase trabajadora organizada y la organización sindical (su estructura, su tradición y sus metodologías de acción) las que tuvieron preeminencia. Es decir, la forma de organización que se impuso en la resistencia en este proceso fue la sindical, tanto por fuera como por dentro de la multisectorial (impulsándola y conduciéndola). En rigor, la Multisectorial va a funcionar como una mesa de la CTA ampliada, abierta a otros sectores, pero funcionando en base al acuerdo de los principales gremios de la "central alternativa": ATE y CTERA (en el caso entrerriano, la organización afiliada a CTERA, Agmer). Esta experiencia multisectorial también se produjo en otras provincias como Jujuy, integrada por el Frente de Gremios Estatales junto a la Unión Empresaria y miembros de la iglesia católica; o Río Negro, donde también el Frente de Gremios Estatales constituyó el eje de la Multisectorial Río Negro de Pie (Cotarelo, 2016, p.202). En estas experiencias multisectoriales, todas hegemonizadas por los sindicatos de los trabajadores del ámbito público, en un contexto marcado por las luchas de carácter defensivo y económico-corporativo, las demandas de los gremios se articularon con la de otros sectores en torno al rechazo del ajuste en general, es decir, al conjunto de las políticas económicas de los respectivos gobiernos provinciales. Ahora volvamos, a la manifestación que representaría la entrada en escena de la multisectorial y un acontecimiento trascendente en la historia reciente del movimiento obrero entrerriano.

4. Pueblazo

La masiva manifestación de más de 6.000 personas¹² frente a la casa de gobierno entrerriana, fue la expresión callejera de un repudio generalizado a las medidas de ajustes previstas en el plan de reforma del estado que buscaba instrumentar el gobierno de Moine. A su vez, la masiva adhesión y participación en la acción conflictiva, implicó un triunfo de la

12 La cifra es la especulada por los periodistas de Análisis, aunque señalan que los organizadores barajaron la cifra de 10 a 12 mil. "Aquí hay más de diez mil entrerrianos", vociferó en su discurso Edgardo Massarotti.

línea política de ATE, que se opuso fuertemente desde un primer momento, y su fortalecimiento en detrimento de UPCN, que no adhirió y fue duramente cuestionada por su vínculo con el gobierno. De aquí en más el liderazgo de ATE en las instancias coordinadoras de lucha contra las políticas de ajuste de la década fue indiscutible.

Hay consenso en los entrevistados que participaron en señalar a la movilización como una de las más importantes en la provincia en la década que iba desde el retorno de la democracia y un hito del movimiento obrero provincial. Para Massarotti “fue quizás la más grande en la historia sindical de la Provincia¹³”, en tanto que para Sologuren “[n]o hubo una movilización más grande llamada por el movimiento obrero en la ciudad de Paraná¹⁴”. Esto a pesar del clima de incertidumbre que se intentó generar desde el oficialismo “consignando de la posibilidad de algunos actos de violencia, a partir de la inserción de supuestos infiltrados que sólo existieron en la imaginación de los gobernantes¹⁵”.

Las “dificultades técnicas” tampoco se perdieron semejante cita: los oradores, entre los que se destacó Edgardo Massarotti, debieron dirigirse a la multitud desde las penumbras, ya que no se les otorgó el permiso para utilizar la energía eléctrica. Recordemos que la movilización se produjo al atardecer, concluyendo a la noche.

Dos días antes de la movilización, cuándo la masividad se dibujaba en el horizonte como algo esperable, Moine había deslizado la idea de reconsiderar algunos despidos, probablemente para desalentar la participación de algunos agentes estatales que estaban en la cuerda floja. Esto luego de que una semana antes había declarado que sería “inflexible” y habló de pasar a “inmediata disponibilidad” a todo aquel que participará de la movilización. La capacidad de organización y, sobre todo, la velocidad de reacción de los trabajadores hizo “ablandar” rápidamente la dureza inicial de Moine.

El gobierno, junto a las amenazas verbales, no escatimó en métodos para obstaculizar o dificultar la protesta. Además de la mencionada negativa, so pena de incurrir en un delito penal, de utilizar los enchufes de la casa de gobierno para la iluminación y la emisión de sonido del acto (tampoco se les facilitó el palco), hubo otros hechos más preocupantes que remitían a períodos oscuros del país: dos dirigentes de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Navarro y Walter Carballo (de la comisión interna del Banco de Entre Ríos), fueron

¹³ Entrevista a Edgardo Massarotti

¹⁴ Entrevista a Alejandro Sologuren

¹⁵ “La plaza del no”, 23/1/1993

interceptados por un patrullero mientras realizaban pintadas en contra del gobierno y demorados durante varias horas en dependencias policiales.

Desde las primeras horas del jueves comenzaron a organizarse los contingentes de manifestantes. Autobuses provenientes del interior (demorados en por controles policiales), los distintos gremios, organizaciones estudiantiles y organizaciones partidarias como la UCR, el PI, los socialistas o Frente del Sur (referenciada en el dirigente Federico Soñez).

La nutrida columna de los docentes avanzó por calle Buenos Aires en dirección a la Plaza 1° de Mayo, entonando, entre otros cánticos “Cuando Dios hizo a Moine lo soñó seminarista, pero nunca imaginó este engendro menemista¹⁶”. El cancionero de la protesta fue escrito a máquina, fotocopiado y repartido a los afiliados, dando cuenta de un importante grado de organización, fundamentalmente teniendo en cuenta que los docentes se encontraban en pleno receso escolar.

La primera columna en arribar a la plaza fue la de ATE, encabezada por Massarotti y algunos dirigentes nacionales que arribaron a la provincia para expresar su apoyo.

Con respecto a la columna del radicalismo, llamó la atención el hecho de estar encabezada por el ex gobernador Sergio Montiel, hombre poco afín a las protestas populares. Al respecto, irónicamente declaró Aldo Bachetti, subsecretario general del Ministerio de Salud y Acción Social: “Montiel va a tener la satisfacción de concurrir a una manifestación con los trabajadores, donde no va a haber ni gases, ni perros”. La columna de la UCR se ubicó a la derecha del improvisado palco.

Los docentes de AGMER, por su parte, ingresaron a la plaza tomados de los brazos y con la dirigente Mary Sánchez a la cabeza, entonando cánticos contra los funcionarios de gobierno, tomando la cortada principal de la plazoleta para ubicarse. Los docentes, sin embargo, de acuerdo con el testimonio de la dirigente Beatriz Montaldo,

“participamos algunos compañeros, pero no el sindicato en su conjunto, todavía no podíamos. ¿Porqué? Porque estaba muy asociada al peronismo la marcha, entonces participamos como militantes algunos, como se le diría “los compañeros” pero (...) los docentes no tenían el problema de las cesantías ni mucho menos, porque hay toda una estructura distinta de lugar orgánico como se nombra. (...) En esa marcha, por supuesto, la del 21 de enero, participamos algunos compañeros desde el lugar personal, pero Agmer no participó como

¹⁶Ídem

sector porque en realidad era la marcha de “los compañeros” y era la marcha absolutamente política (...) contra Moine desde un lugar también del peronismo, desde otro lugar del peronismo”¹⁷.

Es curiosa esta interpretación de Montaldo, asociando la marcha al peronismo, teniendo en cuenta la amplitud de la convocatoria, que incluyó como señalamos en el párrafo anterior, a la UCR e inclusive a Montiel, un dirigente históricamente sindicado como “gorila” desde el peronismo.

El grito “Que se vayan, que se vayan”, casi como una prolepsis de lo que se cantarían casi nueve años después (ampliado al conjunto de las representaciones políticas hegemónicas), precedió el arranque del discurso de Massarotti, encaramado en el furgoncito que hizo las veces de improvisado palco. Hubo cánticos contra el liberalismo y se quemó un muñeco de Moine con un cartel de Los Hermanitos (la cadena de supermercados de su propiedad), que luego fue arrojado a la puerta principal de la Casa Gris. Junto a la lectura del documento elaborado para la ocasión, se leyó también una carta dirigida a Moine escrita por Gerónimo Fernández, hijo de despedidos y se proyectó un video realizado por estudiantes de Comunicación Social. Finalmente, tiñendo de emotividad al acto, el cantautor folclórico local, Jorge Méndez, cantó a capella su clásico “Canción del jornalero”, cuyas primeras estrofas rezan

Qué me esperará mañana
Si no gano mi jornal
Hoy no he conseguido changa
No tengo ni pa' yerbear.

Que le diré a los gurises
Cuando pidan de comer
Es del pobre jornalero
En el mundo padecer.

Esta modalidad fue replicada en las plazas principales de todo el territorio provincial, en muchas de las cuales se proyectó el mismo material audiovisual diseñado por los estudiantes de Comunicación, señalando en cada localidad a los políticos locales que habían votado el ajuste. La lucha por la reincorporación, según cuenta Alejandro Sologuren,

¹⁷Entrevista a Beatriz Montaldo

se dio “[e]n todos los planos. Desde escraches a la casa de Moine a paros provinciales. Los paros nacionales de hecho. Fue la ruptura con el moinismo. Moine nos recibió a nosotros el mismo día que lo recibió a Volando que venía de la Federación Agraria que le venía a pedir también que no adhiriera al plan de Cavallo, y el hizo una reunión con todo el gremio de ATE para explicar porque tenía que hacer el ajuste (...) nosotros dijimos que lo íbamos a confrontar.”¹⁸

La masividad e impacto de esta lucha, desde lo político y lo simbólico, va a ser fundamental para obtener un fallo favorable del Supremo Tribunal de Justicia (en adelante STJ) logrando la reincorporación de los despedidos, quedando como caso testigo para empleados estatales despedidos, ya que sentó jurisprudencia.

5. Consideraciones finales

Hemos profundizado en el relato descriptivo de esta lucha, no solo por la importancia que sus protagonistas le asignan a casi treinta años de su realización, sino porque es un hito en la provincia de la lucha contra el llamado “modelo neoliberal” y marcó en el ámbito provincial el punto de partida del ciclo de luchas que va a encontrar su punto más alto de confrontación en las jornadas de diciembre de 2001 y contiene los principales elementos de dicho ciclo. A saber, la conformación de un amplio frente multisectorial (con preeminencia a su interior de los sindicatos de los trabajadores del ámbito público y conducido principalmente por ATE) de resistencia a los embates neoliberales de los gobiernos como principal forma de organización, la movilización callejera como principal forma de lucha y los escraches como una de las expresiones novedosas.

En ese sentido, la movilización de enero preanunció muchas de las luchas que se posteriormente se desarrollaron en otras provincias contra las leyes ómnibus de ajuste en las cajas provinciales y que se expresaron con mayor violencia en los casos de La Rioja y, especialmente, en Santiago del Estero en diciembre de 1993. La conformación de un actor Multisectorial y la personalización de la protesta política, materializada en escraches individuales a los personajes políticos sindicados de responsables (o cómplices) del ajuste fueron dos elementos, en lo que hace a las formas de organización y de lucha, que posteriormente se replicó en otras provincias.

En materia de formas de lucha, volvió a poner la centralidad de la movilización callejera como el modo de protesta central de los trabajadores en el período para presionar a los

¹⁸Entrevista a Alejandro Sologuren

sectores dominantes, pero también para establecer alianzas con otros sectores, para hacerse visible, influir en la opinión pública y contribuir a la construcción de una fuerza social que sea hegemonizada por los y las trabajadoras. Por otro lado, una de las particularidades de las acciones llevadas a cabo fue la de “escrachar” personalmente a los cómplices del ajuste contra el pueblo trabajador. El impacto de estas medidas, que es combustible de bronca, es mayor cuanto más pequeña es la localidad del legislador o funcionario en cuestión. En el proceso de luchas de 2001-2002 se volverán una constante las protestas frente al domicilio del por entonces gobernador Sergio Montiel.

En materia organizativa, el principal saldo que dejó la lucha contra la 8706, fue la constitución de una organización multisectorial, hegemonizada y dirigida por los trabajadores organizados en sindicatos del ámbito público. La multisectorial fue un actor clave en la provincia en los hechos conflictivos de la década del 90 y del explosivo 2001. El carácter policlasista de la multisectorial fue un elemento de fortaleza, pero también marcó los límites de ese tipo de experiencia. En cuanto a su potencia, está la de trascender los objetivos económico-corporativos de las demandas de los distintos sectores, unificando las luchas y dirigiéndolas contra el conjunto de las políticas económicas del gobierno provincial. Por supuesto que la masividad de la movilización también estuvo dada por la participación sectores políticos de los principales partidos patronales (PJ y UCR) poco afectos a la participación en las luchas de la clase trabajadora (generalmente en la vereda de enfrente, muchas veces atrás de un vallado) que ocasionalmente se encontraban en la oposición. Nos referimos a los sectores del justicialismo vinculados al ex gobernador Jorge Pedro Busti (1987-1991), enfrentado en aquel momento en una interna partidaria al moinismo y al radicalismo liderado por Sergio Montiel (1983-1987). De hecho, ambos dirigentes van a ser quienes sucedan a Moine en la gobernación en la provincia en los dos mandatos siguientes (Busti 1995-1999 y Montiel 1999-2003) y los continuadores de las políticas de ajuste en la provincia, alineados con los respectivos gobiernos nacionales. Su posicionamiento en esta situación particular hace a la “estructura de oportunidad política” que facilitó la irrupción de una acción de semejante magnitudes, a pesar de que fueron los trabajadores organizados en sindicatos y fundamentalmente ATE, los que se pusieron al hombro la acción.

En definitiva, consideramos que el análisis de los denominados “hitos”, son de una necesaria profundización en el análisis de sus principales características y tendencias, ya que presentan muchos de los elementos que marcan los puntos de inflexión y quiebres en los ciclos, fases o etapas de los procesos de lucha. En ese sentido, la movilización de enero del '93 es un hecho clave para comprender la génesis de la fuerza social que confrontó en la

provincia de Entre Ríos las políticas de ajuste y privatizaciones en el proceso que tuvo su punto más alto, tanto a nivel nacional como provincial, en las jornadas de diciembre de 2001.

8. Bibliografía

- Barbeito, A. y Lo Vuolo, R. (1992). *La modernización excluyente*. Buenos Aires, Argentina: Unicef-CIEPP-Losada
- Cotarelo, M.C. (2016). *Argentina (1993-2010). El proceso de formación de una fuerza social*. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
- Dargoltz, R.(2011).*El Santiagueñazo: crónica de una pueblada argentina*. Buenos Aires, Argentina:RyR.
- Farinetti, M. (2017). “Día de furia en Santiago del Estero. El 16 de diciembre de 1993” en Di Meglio, G. y Serulnikov, S. (2017).*La larga historia de los saqueos en la Argentina*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
- Rofman, A. (1999). *Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del carbón, del petróleo y del azúcar*. Buenos Aires, Argentina: Ariel.
- Svampa, M. (2012). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires, Argentina: Taurus.